

B18952



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación

Número: INLEG-2022-16897708-APN-VOCV#TFN

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 22 de Febrero de 2022

Referencia: Sentencia - Expte. N° 46.139-I Dalvian S.A.

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION

AUTOS Y VISTOS:

El expediente N° 46.139-I, caratulado: "DALVIAN S.A. s/apelación-Ganancias" y

CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 11/21 vta se interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 488/15 (DV RRME), de fecha 15 de diciembre de 2015 que le determina de oficio el Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2008 y 2009 con más intereses resarcitorios y multa por el período 2009 con fundamento en el artículo 45 de la ley de rito.

Expresa que la determinación de oficio tiene como fundamento la presunción de devengamiento de intereses prevista en el artículo 73 de la ley de impuesto a las ganancias y en su decreto reglamentario.

Destaca que desde el origen de su actividad de desarrollo inmobiliario existía una sola sociedad, Dalvian que era titular de todo el loteo donde se desarrollaría el Conjunto Residencial Dalvian, siendo a la vez constructora de las obras necesarias para tornar habitable el loteo y la prestadora de los servicios indispensables para el funcionamiento del área.

Agrega que en los años 1998 y 1999 para cumplir con los objetivos económicos expuestos se crea e incorpora al negocio de la recurrente CLC -Conjunto Los Cerros S.A.- luego de una escisión de Dalvian, motivando la reorganización en la necesidad de obtener financiación por parte de entidades bancarias.

Añade que con la finalidad de ampliar la capacidad de venta de los lotes y/o casas en el área urbanizada por Dalvian se solicitó asistencia financiera del Banco Hipotecario, quien sería el vendedor de los lotes como titular fiduciario de los mismos y Dalvian el fiduciante y beneficiario detentando el dominio perfecto de esos lotes.

Continúa expresando que en el año 2002 la actividad se realizaba a través de tres sociedades: Dalvian , encargada

de desarrollar parte de la infraestructura del loteo y luego administrar las áreas ya vendidas y urbanizadas contra la percepción de la tasa especial fijada como contraprestación de los servicios prestados en sustitución de los servicios municipales; DH y CLC encargados de ser titulares y vendedores de los lotes en diferentes áreas del Conjunto Residencial Dalvian y CLC también a cargo de construir algunas obras de infraestructura complementándose con Dalvian.

En 2005 se produce un nuevo requerimiento de financiación a través de un fideicomiso - ONEXT- junto con el Banco Macro y el Banco Credicoop Cooperativo Limitado, del cual es fiduciario Sud Inversiones y Análisis S.A. El objeto del fideicomiso es parte del financiamiento necesario para la cancelación de ciertas deudas contraídas anteriormente por Dalvian, luego cedidas a CLC en su conformación por escisión de aquélla para acelerar el desarrollo inmobiliario. Luego pasa a relatar una serie de actos jurídicos que se producen en 2008 que definen la estructura jurídica, económica y tributaria de la relación entre Dalvian, DH y CLC.

También expresa que durante el año 2008 las tres empresas celebraron un contrato de mutuo e hipoteca con el Banco Credicoop Cooperativo Limitado para cancelar el precio de adquisición del título de deuda emitido por el fideicomiso. Puntualiza que en el contrato de mutuo las tres empresas se constituyeron como codeudores solidarios, siendo dicho pasivo registrado contablemente, sólo en los libros de CLC, aunque en realidad estaba garantizado en su totalidad por terrenos de titularidad de DH.

Continúa relatando que asimismo en el 2008 se celebró un contrato de mutuo con garantía prendaria (sobre Obligaciones Negociables recibidas por las partes en la disolución del fideicomiso Onext) con el Banco Macro a fin de aplicar el préstamo a la cancelación del precio de adquisición del título de deuda emitido por el Fideicomiso de conformidad con el contrato. En este caso también CLC, Dalvian y Dalvian House se constituyeron codeudores solidariamente responsables y, en este supuesto, el pasivo con el Banco Macro fue registrado contablemente en DH.

Luego prosigue manifestando que la extinción del fideicomiso contratado en 2005 y la administración y distribución de los fondos derivados de los mutuos celebrados generaron la necesidad de que Dalvian, DH y CLC adoptaran una nueva estructura jurídica a los fines del cumplimiento de su propósito negocial, para lo cual celebraron un acuerdo de colaboración empresarial (ACE) en el marco de los artículos 367 y siguientes de la LSC, cuyo objeto fue definir una organización común que facilite y desarrolle determinadas fases de su actividad empresarial y perfeccione e incremente el resultado de las mismas, explicando la operatoria de las tres empresas.

Por el referido acuerdo (ACE) Dalvian incrementará sus ingresos en virtud de la posibilidad de cobrar la tasa diferencial prevista por ley 4886 a más propietarios y por el aumento de la misma en base a más y mejores servicios. Por su parte CLC y DH incrementarán el valor de sus lotes y la factibilidad de su venta a terceros en atención a las mejoras de amenities y servicios que ofrecerá el Conjunto Residencial a la población, elevando su calidad de vida y también se benefician pues los lotes de su titularidad recibirán adecuadamente servicios hasta su efectiva venta.

Concluye expresando que la relación entre las partes que sustenta la distribución de fondos cuestionada por el Organismo Recaudador se encuentra estructurada y respaldada por el ACE.

A raíz de la inspección el Organismo Recaudador practicó ajustes que fueron conformados por Dalvian y CLC en materia de disposición de fondos a favor de terceros. En lo que respecta a DH, si bien conformó los ajustes consistentes en la entrega de fondos a sus accionistas, manifestó la disconformidad respecto a la estimación de intereses presuntos sobre fondos que habían sido entregados a Dalvian y CLC, por cuanto los mismos fueron

entregados en interés de DH y para el desarrollo conjunto del loteo denominado Conjunto Residencial Dalvian a través de diferentes fideicomisos y acuerdos de colaboración empresaria.

Funda su petición en que si bien la presunción del artículo 73 de la ley del impuesto a las ganancias no admite prueba en contrario, debe tenerse en cuenta la existencia de sujetos de derechos distintos a quien dispone de los fondos para tenerla por acreditada; pero en el caso, continúa expresando, la mención al conjunto económico tuvo otra finalidad y que fue la de dar luz sobre las verdaderas relaciones entre DH y las otras dos sociedades de capital, que dan cuenta de que DH dispuso de esos fondos en interés propio y no de Dalvian y CLC como concluye la resolución impugnada.

Asimismo refuta la conclusión arribada por la resolución apelada en cuanto a que las disposiciones de fondo sólo respondieron a intereses de grupo económico manifestando que en cumplimiento del acuerdo de colaboración empresaria -ACE- DH no puede vender el lote en el Conjunto Residencial Dalvian si el mismo no se encuentra urbanizado, para lo cual decidió girar esos fondos a terceros y esa disposición de fondos generó beneficios mediatos para el conjunto económico del cual DH forma parte y permitió el cumplimiento de los objetivos pactados en el ACE, dejando en claro que el primer beneficiario e interesado en la disposición de los fondos no fue el conjunto económico, sino DH como titular de los lotes y aportante de los recursos para la urbanización de los mismos.

Entiende que el acto apelado viola el principio de legalidad tributaria consagrado en la CN y las garantías constitucionales de capacidad contributiva, propiedad y razonabilidad.

Pide la revocación de la multa y para el caso de confirmarse la determinación, plantea el error de hecho y de derecho excusable eximente de la responsabilidad. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita la revocación del acto apelado con costas a la contraria.

II.- A fs. 69/84 el Fisco Nacional contesta el recurso interpuesto solicitando su rechazo, con costas.

Expresa que a raíz de la fiscalización realizada resultó un ajuste a favor del Fisco, constatándose que en el rubro "Otros Créditos", figuraban créditos con las empresas Dalvian S.A. y Conjunto Los Cerros S.A., que corresponde a empresas del mismo grupo. De la prueba colectada se observó que alguno de los movimientos estaban relacionados con gestiones comerciales de empresas y otros que reflejan operaciones de préstamo de dinero entre empresas vinculadas o de financiamiento de operaciones de empresas.

Destaca que las apreciaciones efectuadas en la resolución determinativa de oficio, sobre las pruebas aportadas, respetan la regla de la sana crítica, poniendo de manifiesto que en los procedimientos de determinación de oficio, le corresponde al sujeto pasivo de la obligación tributaria probar la autenticidad de sus dichos, señalando que en la instancia administrativa la actora no logró revertir el criterio del juez administrativo en afán de alcanzar la verdad de los hechos.

Sostiene que en el caso se trata de sociedades de capital que tienen personalidad propia y cada uno es sujeto directo del impuesto como persona de existencia ideal de conformidad con el artículo 1° de la ley del tributo y, aunque haya vinculación entre una serie de este tipo de sujetos, éstos no tributan sobre una base imponible "consolidada", sino individual de cada uno y menos aun respecto de un solo rubro de sus movimientos, como es el que representa la disposición de fondos. Añade que las alegaciones de la actora confirman que las operaciones respondieron a interés del grupo económico, a lo que se agrega que su actividad comercial dista de ser dirigida a la actividad financiera, pues por el contrario su objeto social es la construcción, reforma y reparación de edificios residenciales, por lo cual difícilmente los préstamos efectuados correspondan a operaciones propias del giro

comercial, habiéndose constatado que no se ha pactado interés alguno y que sí se han refinanciado los préstamos.

Entiende que la actora al no agravarse respecto de los intereses resarcitorios los ha consentido. Se manifiesta sobre la procedencia de la multa aplicada. Cita jurisprudencia. Acompaña las actuaciones administrativas. Se opone a la prueba ofrecida por la recurrente. Hace reserva del caso federal. Pide que oportunamente se dicte sentencia rechazando el recurso impetrado con costas.

III.- A fs. 89 se hace lugar a la prueba informativa a Dalvian y CLC, los que se contestan a fs. 97 y 98. A fs. 95 se ordena pericial en tasaciones inmobiliarias. A fs. 201 la recurrente denuncia la fusión por absorción de Dalvian House S.A. por parte de Dalvian S.A. Afs. 212 se ordena recaratular la causa "DALVIAN HOUSE S.A." como "DALVIAN S.A." A fs. 216 se ordena pericia contable. A fs. 219/249 se agrega el informe pericial en tasaciones inmobiliarias. A fs. 265/295 se agrega la pericia contable, la que es impugnada parcialmente por el Fisco a fs. 598/vta. A fs. 610 se clausura, eleva a Sala y pasan los autos para alegar. A fs. 613/619 obra el alegato del Fisco Nacional y a fs. 655/663 el de la actora. A fs. 664 pasan los autos a sentencia.

IV.- Que, en primer término, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: "Sopes, Raúl Eduardo c/Administración Nacional de Aduanas", sentencia del 12/2/87, "Stamei S.R.L. c/Universidad de Buenos Aires s/Ordinario", sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re "Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento", sentencia del 27/4/98 y "Congelados Macchaivello y Cía. S.A." del 26/4/2007, entre otros)

Que asimismo cabe destacar que "los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa sino sólo aquellas que estimen conducentes para fundar sus conclusiones, ni tratar todos los temas expuestos, ni analizar todos los argumentos utilizados que a su juicio no sean decisivos (fallos 272:325)", citado por la CNACAF, Sala IV 19-02-97, Causa N° 2783, "Rúffolo Roque c/ DGI", TFN 13.174-I.

Que en materia de intereses presuntos interesa, en primer lugar, mencionar las disposiciones legales y reglamentarias que resultan de aplicación en los distintos períodos fiscales comprendidos por la determinación de oficio, así conforme el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias "toda disposición de fondos o bienes efectuados a favor de terceros por parte de los sujetos comprendidos en el artículo 49, inciso a), y que no responda a operaciones realizadas en interés de la empresa, hará presumir, sin admitir prueba en contrario, una ganancia gravada equivalente a un interés con capitalización anual no menor al fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales o una actualización igual a la variación del índice de precios al por mayor nivel general, con más el interés del ocho por ciento (8%) anual, el importe que resulte mayor. Las disposiciones precedentes no se aplicarán a las entregas que efectúen a sus socios las sociedades comprendidas en el artículo 69, inciso a), apartado 2. Tampoco serán de aplicación cuando proceda el tratamiento previsto en el artículo 14, párrafos 3 y 4.

A su vez, dicha disposición legal fue precisada por el reglamento que dispuso que en su artículo 103 que a efectos de la aplicación del artículo 73 de la ley, se entenderá que se configura la disposición de fondos o bienes que dicha norma contempla, cuando aquéllos sean entregados en calidad de préstamo, sin que ello constituya una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa o deban considerarse generadoras de beneficios gravados. Se considerará que constituyen una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa, las sumas anticipadas a directores, síndicos y miembros de consejos de vigilancia, en concepto de honorarios, en la medida que no excedan los importes fijados por la Asamblea correspondiente al ejercicio por el cual se

adelantaron y siempre que tales adelantos se encuentren individualizados y registrados contablemente. La imputación de intereses y actualizaciones presuntos dispuesta por el citado artículo, cesará cuando opere la devolución de los fondos o bienes, oportunidad en la que se considerará que ese hecho implica, en el momento en que se produzca, la cancelación del crédito respectivo con más los intereses devengados, capitalizados o no, generados por la disposición de fondos o bienes respectiva. Sin embargo, si en el mismo ejercicio en el que opera la devolución o en el inmediato siguiente, se registraran nuevos actos de disposición de fondos o bienes en favor del mismo tercero, se entenderá que la devolución no tuvo lugar en la medida dada por el monto de esas nuevas disposiciones y que los intereses y actualizaciones que proporcionalmente correspondan a dicho monto no han sido objeto de la cancelación antes aludida. A todos los fines dispuestos por el artículo 73 de la ley y por este artículo, los bienes objeto de las disposiciones que los mismos contemplan se valuarán por su valor de plaza a la fecha de la respectiva disposición...”.

Que, en este contexto normativo, deben señalarse los expresos requisitos legales y reglamentarios para la procedencia del régimen aplicado por el Fisco Nacional, teniendo en cuenta que, en principio, la normativa legal transcrita encierra un amplio campo de posibilidades tales como préstamos, adelantos a directores, salidas no documentadas, donaciones, hasta simples ventas a plazo sin interés (ya que la ley se refiere a fondos o bienes). Esta enumeración de posibilidades aparece, luego por vía reglamentaria, acotada al tratamiento del concepto “préstamos” (o liberalidades).

Que, a los efectos de la aplicación del susodicho régimen, la disposición de fondos o bienes se configura por especificación reglamentaria, en tanto éstos sean entregados en calidad de préstamo, sin constituir una consecuencia de operaciones propias del giro de la empresa o generadores de beneficios gravados. El reglamento no define qué debe entenderse como consecuencias propias del giro, sino que expone una serie de ejemplos.

V.- En el caso de autos las disposiciones de fondos realizadas entre los sujetos involucrados, es decir Dalvian House S.A. -la recurrente en los períodos determinados en el acto apelado-, Dalvian S.A. y Conjunto los Cerros S.A., fueron consideradas por la auditoría practicada a la apelante como de un mismo grupo económico, circunstancia que la actora alega en su defensa y considera necesaria para la realización de su actividad de desarrollo inmobiliario descripta en en Considerando I.

El Fisco reconoce la vinculación de estas empresas -véase fs. 445, Cuerpo 3/3 de las actuaciones administrativas- toda vez que las mismas comparten un director, la recurrente tiene los mismos directores y accionistas que Dalvian S.A. y respecto de Conjunto los Cerros S.A. un director de la rubrada es accionista y comparte un director. A pesar de esta vinculación económica, los cargos formulados se fundamentan en que la recurrente no acreditó que los préstamos se relacionen con el giro comercial de la empresa o importen un beneficio gravado para la fiscalizada, más allá de los intereses del grupo.

Se especifica en este sentido que la rubrada deriva fondos propios para hacer frente a gastos ocasionados por otras empresas del grupo, generando saldos pendientes de cancelación sobre los cuales no se reconoce interés alguno. Asimismo, como reza en la página 13 del acto apelado, el objeto social no está dirigido a la actividad financiera sino que la sociedad tiene como objeto exclusivo la construcción y venta de inmuebles, actividad declarada ante la AFIP, por lo que no puede afirmarse que los préstamos efectuados correspondan a operaciones propias de su giro comercial.

También destaca el Fisco Nacional que las empresas integrantes de ese grupo económico son sociedades jurídicamente independientes que se encuentran inscriptas en la AFIP y cada una de ellas es un sujeto pasivo de sus obligaciones tributarias.

Por otro lado, la actora alega que durante 2008, motivado en la necesidad de obtener financiación de entidades bancarias para cumplir con la actividad de desarrollo del emprendimiento inmobiliario, se producen una serie de actos jurídicos relacionados con los fideicomisos pactados, que definen la estructura jurídica, económica y tributaria de las tres sociedades, por lo que argumenta que la distribución de fondos no fue realizada a favor de terceros, sino a empresas de un mismo grupo económico, poniendo de manifiesto que Dalvian House S.A. nació como una parte inescindible y estrechamente vinculada a Dalvian S.A. con el fin de facilitar la financiación del Conjunto Residencial Dalvian.

No obstante, aún de aceptarse el criterio de la actora de la existencia de un grupo económico, cabe traer a colación lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al sentenciar en los autos “Fiat Concord S.A.” y “BJ Services S.R.L.”, ambos con fecha 6/3/2012, donde señaló: “8º) Que, contrariamente a lo sostenido por el apelante, el hecho de que la disposición de fondos se efectúe — como ha ocurrido en el caso— entre sociedades vinculadas económicamente entre sí, o en relación de sujeción económica por revestir una de ellas una condición dominante respecto de otra dependiente, no impide considerar que dicha disposición se haya efectuado a favor de terceros, en los términos del art. 73 que se examina, puesto que se trata de distintos sujetos de derecho que son considerados individualmente como sujetos pasivos de la obligación tributaria.”

Más adelante en los mismos precedentes, el Alto Tribunal agregó: “9º) Que, establecida la individualidad jurídica de cada sujeto, cabe concluir que cuando el art. 73 de la ley alude a las operaciones realizadas en “interés de la empresa” —recaudo estrechamente ligado al establecido en la reglamentación acerca de que la presunción operará si los fondos entregados en calidad de préstamo no responden a operaciones propias del “giro de la empresa”—, no se refiere al interés del conjunto económico sino al del sujeto al que se encuentra dirigida la norma, esto es, la sociedad de capital que efectúa la disposición de fondos o bienes.”

Sin embargo, cabe destacar que en la misma sentencia el Alto Tribunal pone de resalto que, sin perjuicio de la definición efectuada, en el supuesto de las sociedades que integran un conjunto económico, podrían existir modalidades comerciales peculiares, que deberán ser contempladas, en cada caso, mediante una exhaustiva ponderación de la causa que originó la entrega de los fondos o bienes, y de la correlativa contraprestación por parte de quien los recibió.

Efectivamente, la propia Corte poco tiempo después del fallo “Fiat Concord”, dicta sentencia el 24/4/2012 en la causa “Dragados y Obras Portuarias S.A.”, donde teniendo en cuenta las pruebas aportadas en dichas actuaciones en las instancias anteriores, entendió que surgía que la sociedad desarrollaba actividad conjunta con otra empresa del mismo grupo económico y en la que el aporte de los fondos tenía como destino el desarrollo de actividades efectuadas en conjunto entre las dos sociedades, descartando la aplicación del interés presunto por considerar que en definitiva se trataba de una disposición en beneficio de la empresa por la actividad desarrollada en esas operaciones.

De la lectura de los fallos del Tribunal Fiscal de la Nación y de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, dictados el 23/11/2004 y el 5/6/2008, respectivamente, se desprende que la prueba arrojada a la causa daba cuenta de la existencia de numerosos negocios emprendidos en forma conjunta y mancomunada por la empresa y la sociedad accionista controlante, con actividades empresariales distintas y complementarias entre sí, tomando distintos préstamos bancarios en forma conjunta como asimismo que la disposición de fondos respondía en su casi totalidad a emprendimientos conjuntos.

Que en el caso de autos de las constancias agregadas en las actuaciones administrativas como en la presente causa como prueba documental y la que es acompañada y merituada por los peritos contadores que presentaran su

informe a fs. 583/594vta., se observa que:

a) La firma Dalvian S.A. era titular de inmuebles en la zona oeste de la ciudad de Mendoza, siendo la que inició como constructora y desarrolladora el emprendimiento residencial conocido como Barrio Dalvian.

b) Hacia 1997 las mismas personas físicas titulares de las acciones de Dalvian S.A., crean e incorporan al negocio a la firma Dalvian House (la contribuyente aquí determinada y que ya avanzada esta causa fue absorbida por fusión por Dalvian S.A., lo que motivó la recatulación de estos actuados); a efectos de que actuara como sociedad originante de créditos hipotecarios a través del Banco Hipotecario.

c) En el año 1999 se produce la creación por escisión de una parte de Dalvian S.A. de la firma Conjunto Los Cerros S.A. (CLC), proceso en el cual se le transfieren a ésta última una cantidad de lotes para que desarrolle un área específica del conjunto residencial.

d) En el año 2002 se produce otra escisión en la que Dalvian S.A. cede a Dalvian House (DH) la totalidad de los terrenos en existencia para la comercialización. Dalvian S.A. es la encargada de la urbanización y administrar las áreas ya vendidas y urbanizadas; DH comercializa lotes y CLC comercializa lotes y construye obras de infraestructura complementándose con Dalvian.

e) En el año 2005 las tres empresas con los Bancos Macro y Credicoop celebran un contrato de fideicomiso (Fideicomiso Onext).

f) En el año 2008, las tres firmas celebran un contrato de mutuo e hipoteca con el Banco Credicoop Cooperativo Limitado. También celebraron un mutuo con garantía prendaria con el Banco Macro. Los fondos se aplicaron para la adquisición de los títulos de deuda en poder de dichos bancos emitidos por el Fideicomiso Onext.

g) En ese mismo año las tres firmas suscriben un Acuerdo de Colaboración Empresaria con el objeto de establecer una organización común que facilite determinadas fases de la actividad y perfeccione e incremente el resultado de la misma. Dalvian S.A. se compromete a mantener el correcto estado de funcionamiento de los servicios tanto de los lotes vendidos a terceros (por los que cobra a éstos una tasa) como por los aún no vendidos cuya titularidad corresponde a las empresas que integran la agrupación, además de ejecutar obras de infraestructura, con fondos propios como con los que le giren las otras sociedades agrupadas. CLC se compromete a efectuar obras comunes de infraestructura y a la comercialización de casas-habitación dentro del conjunto residencial. DH por su parte compromete su actividad a la venta de terrenos urbanizados, considerando que no dispone de los elementos necesarios para efectuar por sí la construcción de obras comunes, las que realizará a través de las otras dos empresas. De esta forma el acuerdo busca incrementar los ingresos de Dalvian S.A. e incrementar el valor de los lotes de propiedad de CLC y DH y, consecuentemente, su venta a terceros.

En efecto del informe pericial de tasaciones inmobiliarias agregado a fs. 233/249vta. de la cual se desprende que el mayor valor de los lotes del Conjunto Residencial Dalvian, propiedad de CLC y DH se debe a las inversiones en infraestructura realizadas dentro del emprendimiento que no tienen el resto de los fraccionamientos de la zona, lo que transforma a Dalvian en un barrio de mayor categoría, lo que se ve reflejado en los valores de mercado de los inmuebles que se venden dentro del loteo; los que, según los peritos, se valúan aproximadamente en un 50% más que los lotes de similares características en loteos de la zona que carecen de la infraestructura del Conjunto Residencial Dalvian (Club House, Agua, Cloacas, calles asfaltadas, etc.).

Asimismo, de la documentación aportada en el informe pericial contable y de la respuesta de la Perito Contadora Camanella (sin observaciones del perito Domper) surge que en los ejercicios 2008 al 2015 la empresa DH

adelantó fondos a cuenta de obras por veintiocho millones de pesos, en tanto que Dalvian S.A. le facturó treinta y un millones de pesos en obras. Por su parte a CLC le entregó fondos a cuenta por veintiún millones de pesos y ésta le facturó dieciocho millones de pesos de obras.

En definitiva la prueba arrojada en autos permite concluir -tal como en los precedentes jurisprudenciales antes citados- que nos encontramos frente a una modalidad comercial en la que la sociedad objeto de la determinación de oficio aquí apelada realizaba su actividad en forma conjunta con otras empresas del mismo grupo y el aporte de los fondos que dieron lugar al ajuste que aquí se trata, tenía como destino el desarrollo de esas actividades, no solo en beneficio del propio grupo sino de la propia empresa en función de que obtenía un beneficio propio para su actividad específica (venta a terceros de los lotes de su propiedad). En definitiva, se advierte la existencia de un negocio emprendido en forma conjunta y mancomunada, con actividades empresariales distintas y complementarias entre sí, tomando distintos préstamos bancarios en forma mancomunada que respondían a esos emprendimientos conjuntos con beneficio para el grupo pero también para la propia recurrente.

Por ello, SE RESUELVE:

Revocar el acto apelado en autos, con costas.

Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.

Digitally signed by Pablo Alejandro Porporatto
Date: 2022.02.21 17:16:15 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Pablo Alejandro Porporatto
Vocal
Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva
Tribunal Fiscal de la Nación

Digitally signed by Armando Magallon
Date: 2022.02.21 19:45:45 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Armando Magallon
Vocal
Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva
Tribunal Fiscal de la Nación

Digitally signed by Jose Luis Perez
Date: 2022.02.22 09:59:16 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Jose Luis Perez
Vocal
Vocalía V Sala B Competencia Impositiva
Tribunal Fiscal de la Nación

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.02.22 09:59:44 -03:00